

El comercio ahorrará 200 millones con la bajada de la comisión de las tarjetas

El gran consumo insta a Bruselas a reconsiderar su petición de subir el IVA

Javier Romera MADRID.

La rebaja de las comisiones por el pago con tarjeta supondrá para el comercio un ahorro de más de 200 millones de euros según anunciaron ayer en un comunicado conjunto la Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución (Anged) y la Confederación Española del Comercio (CEC), que representan los intereses de los pequeños y medianos establecimientos.

El Gobierno no ha querido esperar a que Europa fije la norma y el pasado viernes anunció en el marco del Plan para el Crecimiento, Competitividad y Eficiencia una rebaja tarifaria que, en la práctica, podría abaratar a la mitad las comisiones soportadas por los comercios cada vez que sus clientes deciden abonar las compras con dinero de plástico en lugar de efectivo.

La tasa interbancaria quedará así fijada en el 0,3 por ciento en las compras con tarjeta de crédito y en el 0,2 por ciento si se desembolsa a débito - o siete céntimos de euro, la que resulte menor de ambas, según prevé el Parlamento europeo - frente al 0,79 por ciento máximo vigente en la actualidad.

Las tasas

Las tarifas interbancarias son las que cobra el banco emisor de la tarjeta que instala el lector al comercio (TPV) por los costes del mismo. Cada entidad es autónoma para cargarlas a las tiendas o eximir las de su abono, aunque la realidad es que se traslada a través de las tasas de descuento, que son las que los bancos cobran a los comercios. Según el sector, su bajada permitirá reducir los costes y, por tanto, impulsar su competitividad.

Actualmente, el pequeño comercio es el que soporta las tasas por el pago con tarjeta más elevadas, que



El pago con tarjeta en el comercio tendrá menos comisiones. EE

se sitúa de media en el 0,74 por ciento del valor de la transacción para pagos con tarjeta de crédito y una comisión fija de 0,32 euros para las operaciones con tarjeta de débito.

Como ha señalado el Parlamento Europeo, este ahorro de costes se traducirá, según las patronales del pequeño y el gran comercio, en mejores precios para los consumidores. En el caso de España supondrá, por tanto, una medida de estímulo para la confianza y el consumo que, en los últimos meses, ha iniciado un nuevo ciclo. "Es un magnífico punto de partida y esperamos que podamos ir situando esos

topes incluso más bajos, como de hecho está proponiendo Europa", aseguraron ayer en el comunicado.

De hecho, desde ambas organizaciones han demandado en múltiples ocasiones la supresión de las tasas de intercambio para operaciones con tarjetas de débito.

Todas las organizaciones empresariales del sector del gran consumo, especialmente las alimentarias, valoraron ayer por otro lado positivamente la intención manifestada por el Gobierno de no subir el IVA ni reclasificar los productos, rechazando así la recomendación del FMI y la Comisión Europea de

60.000
MILLONES DE EUROS

Las diez grandes patronales y asociaciones del sector del gran consumo, alimentación y hostelería aseguran que una reclasificación del IVA del 10 al 21 por ciento podría reducir hasta un 9,3 por ciento la renta disponible de los hogares, lo que equivale a una pérdida de 60.000 millones de euros. Las organizaciones empresariales insisten en que los productos gravados al 10 por ciento suponen más del 64 por ciento del total del gasto, y entre ellos se incluyen además los productos básicos de cesta de la compra.

subir esta imposición. En una nota de prensa conjunta, un total de diez asociaciones y patronales instaron a los organismos internacionales a que consideren los "esfuerzos y ajustes" que la sociedad española ha realizado" y pidieron "evitar una posible reforma fiscal que ponga en riesgo la competitividad y estabilidad del sector y por ende el conjunto de la economía nacional".

A este respecto, recordaron que las consecuencias de la subida del IVA en los años 2010 y 2012 constataron una caída media del consumo en tasa interanual en los seis meses siguientes del 6,7 por ciento, por lo que podría poner "en peligro" la recuperación económica y el empleo. Como solución para incrementar los ingresos del Estado, ven "urgente" garantizar una mayor transparencia en el sistema y un endurecimiento de la lucha contra el fraude fiscal, que representa en torno al 22 por ciento del PIB.